

Mérida Yucatán, 29 de agosto 2024.
Oficio Núm. DUA-261/2024.

Lic. Carlos Alberto Peraza Ávila

Jefe Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Estadística
Tribunal Superior de Justicia del Estado

Presente. -

En atención a su oficio DTAIPE-TSJ-368/2024 relativa a la solicitud de información identificada con el número de folio **310573824000152**, en el que se requiere:

"Oficio DUA-162/2024 de fecha treinta y uno de mayo del año en curso, suscrito por el Maestro en Derecho Carlos M. Cetina Patrón, coordinador Jurídico de la unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes, y la Licenciada en Administración María Cristina Sánchez Tello Zapata, Directora de la Unidad de Administración del Tribunal Superior."

Se hace de su conocimiento que el oficio **DUA-162/2024** fue elaborado en conjunto por las áreas firmantes y presentado para su estudio en la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, celebrada el día seis de junio de dos mil veinticuatro, el cual contiene un **análisis jurídico-administrativo** elaborado con fundamento en las fracciones I y XII del artículo 56, fracciones VI y VII del artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán; y en apego a lo dispuesto en el decimoquinto párrafo del artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán y la fracción I del artículo 6 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

Conforme al artículo 90 fracción VI y VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes tiene como atribución promover y realizar investigaciones, estudios jurídicos y proyectos normativos relacionados al mejoramiento de la impartición de justicia, así como asesorar jurídicamente a los Plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura y a la Presidencia del Tribunal; siendo el Pleno del Tribunal Superior de Justicia quien, conforme al artículo 30 de la citada Ley Orgánica, deberá en su caso determinar las acciones jurídicas y administrativas que estime conducentes en relación a dichos análisis.

Ahora bien, tal y como se desprende de la décimo primera sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, celebrada el día 06 de junio de 2024, en la misma, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia tuvo conocimiento del



análisis jurídico-administrativo realizado aprobando su contenido, más no ordenó acción alguna, de naturaleza jurídica o administrativa, para la ejecución de las opiniones o recomendaciones plasmadas en el mismo.

Ello se desprende del acuerdo tomado en la sesión que dice lo siguiente: *“se aprueba el contenido del análisis jurídico administrativo elaborado en conjunto por las áreas antes señaladas; en consecuencia, comuníquese a las mismas.”*

Es decir, el oficio DUA-162/2024, que contiene un análisis jurídico-administrativo, **se trata de una opinión, recomendación, propuesta o punto de vista** emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de Administración del Tribunal Superior de Justicia, cuyo contenido tuvo conocimiento el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán en la sesión del día 06 de junio de 2024, **sin que hasta el momento dicho órgano colegiado haya tomado una decisión definitiva sobre los puntos planteados en el mismo ni ordenado acción alguna que se traduzca en la ejecución de las propuestas planteadas.**

En esas condiciones, resulta evidente que el contenido del oficio DUA-162/2024 requerido por la parte solicitante, encuadra en el supuesto previsto en la fracción VIII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por lo tanto **ES SUSCEPTIBLE DE SER CLASIFICADO COMO RESERVADO**, se explica:

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone que la información que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, es susceptible de reserva. Al reservarse esta información lo que se protege es la secrecía en la toma de decisiones hasta que éstas no sean adoptadas, a fin de que dicha deliberación no sea afectada por agentes externos, como podrían ser los medios de comunicación. En ese sentido, la razón legal de dicha causal de reserva es evitar que se divulgue información que pueda entorpecer o afectar el correcto desarrollo de la deliberación.

Asimismo, los *“Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de La Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas”*, emitidos por Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, señalan que se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo.



Dicho esto, en el caso que nos ocupa, el oficio requerido, encuadra en el supuesto previsto en la fracción VIII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que como se ha dicho se trata de una opinión, análisis o propuesta, jurídico-administrativa emanada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de Administración del Tribunal Superior de Justicia, respecto de la cual, el órgano encargado de deliberar sobre su implementación o ejecución, **no ha tomado decisión alguna**, por lo que de darse a conocer su contenido a agentes externos, previa la toma de decisión que en su caso recaiga a dicha propuesta, podría afectarse la imparcialidad e independencia de quienes forman parte del ente colegiado deliberante, es decir, los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.

Conforme a los "*Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de La Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas*", en caso de considerar como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: I. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio; II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo; III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

Los requisitos señalados se actualizan del siguiente modo:

I. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio:

Durante el desarrollo de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, celebrada el día **06 de junio de 2024**, la secretaria general de acuerdos, informó que durante el desarrollo de esta Sesión, le fue presentado el oficio DUA-162/2024 de fecha 31 de mayo del año en curso, suscrito por el maestro en Derecho Carlos M. Cetina Patrón, coordinador jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la licenciada en administración María Cristina Sánchez Tello Zapata, directora de la Unidad de Administración, ambos de este Tribunal.

Transcurrido el tiempo para su análisis, por mayoría de votos, el Pleno aprobó el contenido del análisis jurídico-administrativo elaborado en conjunto por las áreas antes señaladas y, en consecuencia, ordenó comunicárselo a las mismas.

En ese sentido, tenemos que existe un proceso deliberativo en curso, consistente



en la determinación que en su caso emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado respecto a la implementación o ejecución de las propuestas contenidas en el oficio DUA-162/2024, mismo proceso que inició el día 06 de junio de 2024, fecha en la que se presentó para su análisis el contenido de las opiniones, recomendaciones y propuestas plasmadas en el estudio elaborado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de la Unidad de Administración.

Se trata de un proceso deliberativo ya que conforme al artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, tiene como atribución, entre otras, tanto aprobar el anteproyecto anual de Presupuesto de Egresos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como ejercer el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, y resolver sobre transferencias de las partidas de dicho presupuesto.

En ese sentido, la propuesta u opinión emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de la Unidad de Administración, misma que tiene un impacto de naturaleza presupuestal, forma parte de un proceso deliberativo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, quien podrá o no tomar una decisión respecto a lo plasmado en dicho estudio, en ejercicio de sus atribuciones descritas en el artículo 30 citado.

No hay que perder de vista que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en la toma de decisiones, si bien podrá tomar en consideración la opinión jurídico-administrativa emanada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de Administración del Tribunal Superior de Justicia sobre el tema al que hace referencia el oficio DUA-162/2024, **podrá también requerir información a otras áreas del Tribunal Superior de Justicia, a autoridades ajenas al Poder Judicial o agentes externos como universidades, colegios, entre otros**, incluso, conforme a la fracción XXIII del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá acordar la contratación de servicios externos de asesoría, para el perfeccionamiento de la actividad jurisdiccional y de la que corresponde a las diferentes áreas del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

En dichas condiciones, resulta evidente que el acto en el cual el Pleno tuvo conocimiento de la propuesta, análisis u opinión jurídico-administrativa emanada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de Administración del Tribunal Superior de Justicia, sin que hasta el momento haya tomado determinación alguna en relación a la ejecución, o no, de lo propuesto en dicho documento, no puede considerarse una determinación concluyente por parte del órgano facultado para ello.



II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo;

La información contenida en el oficio DUA-162/2024 de fecha 31 de mayo del año en curso, se trata de una opinión, recomendación o punto de vista de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de la Unidad de Administración, áreas que dependen organizacionalmente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, ya que sus titulares son designados directamente por el Pleno del Tribunal conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, es decir, son unidades internas del Poder Judicial del Estado de Yucatán, y que por lo tanto, la información u opiniones que emanan de dichas áreas forman parte del proceso deliberativo iniciado tras la presentación del oficio al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán para su análisis.

III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y

La información contenida en el oficio DUA-162/2024, se encuentra relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo existente que se sigue ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, ya que justamente, fue la presentación del mismo ante el Pleno en la sesión ordinaria del 06 de junio de 2024, lo que dio inicio a la discusión y deliberación de las acciones que en su caso se tomen para su implementación o ejecución.

IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

De difundirse la información contenida en el oficio DUA-162/2024, se podría interrumpir, menoscabar o inhibir cualquier determinación que en su caso emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán para la implementación de las propuestas contenidas en el estudio jurídico-administrativo emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de Administración del Tribunal Superior de Justicia, ya que la deliberación podría verse influida presiones de agentes externos que tengan conocimiento previo de las opiniones ahí expuestas.

No hay que perder de vista que conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán los magistrados y los jueces deberán emitir sus resoluciones al margen de presiones de los otros poderes, de las partes o grupos sociales, individuos o de los propios miembros del Poder Judicial (principio de independencia). En ese sentido, dar a conocer información que pueda interrumpir, menoscabar o inhibir cualquier determinación que en su caso emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, debe entenderse que afecta o



pone en riesgo la libre toma de decisiones de dicho ente colegiado.

Ahora bien, en cuanto a la **PRUEBA DE DAÑO**, que conforme al artículo 104 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberá justificarse al clasificar determinada información de reservada, es decir, la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla; se sostiene por los siguientes motivos:

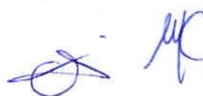
1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.

La información correspondiente al oficio DUA-162/2024, al forma parte de un documento que contiene una opinión, recomendación o punto de vista emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de Administración del Tribunal Superior de Justicia, de ponerse a disposición de agentes externos, podría vulnerar el proceso deliberativo del Pleno que tuvo conocimiento del mismo y las resoluciones ejecutivas que en su caso emita.

Dar a conocer las opiniones jurídico-administrativas contenidas en el oficio DUA-162/2024 de manera previa a la toma de decisiones por quien legalmente tiene atribuciones para ejecutar su contenido, violaría el proceso deliberativo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, ya que factores externos podrían influir en la imparcialidad u objetividad de quienes forman parte de la toma de decisiones, afectándose la libertad decisoria de este ente colegiado.

Además, de proporcionar la información contenida en el oficio DUA-162/2024, se causaría un daño en el desarrollo normal de las atribuciones o actividades de la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, afectándose la libertad en el ejercicio de sus facultades consistentes en promover y realizar investigaciones, estudios jurídicos y proyectos normativos relacionados al mejoramiento de la impartición de justicia, así como asesorar jurídicamente.

No hay que perder de vista que conforme al artículo 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, las disposiciones contenidas en dicha Ley, incluyendo, las normas que facultan al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, para tomar decisiones relativas a su propio funcionamiento y organización, son normas de orden e interés público. En ese sentido, todo acto que impida, menoscabe, interrumpa o inhiba la toma de decisiones de dicho ente colegiado, como lo sería la divulgación a agentes externos de la información que aquí se pretende, debe considerarse como perjudicial para el interés público.



2.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda dicha información

Divulgar la información contenida en oficio DUA-162/2024 que se encuentra en análisis y evaluación no aporta beneficio social alguno y sí un daño al interés público que se traduce en la necesidad de salvaguardar el proceso deliberativo existente en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en particular, la toma de decisiones, libre y con independencia de todo lo referente a su organización interna y funcionamiento.

Además, la información solicitada, consiste en una mera opinión, punto de vista o propuesta de unidades internas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, por lo que el supuesto interés de conocer su contenido, previa la toma de cualquier decisión del Pleno sobre las propuestas ahí planteadas, no puede superar la necesidad de proteger el perjuicio que supondría la divulgación de dicha información en el proceso deliberativo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, mismo que debe desarrollarse de forma libre e independiente de injerencias externas.

3.- La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo

La clasificación de la información solicitada como reservada es el mecanismo idóneo para evitar el perjuicio que pudiese existir por dar a conocer las opiniones, recomendaciones o puntos de vista de las Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes y la Dirección de Administración del Tribunal Superior de Justicia previa a la toma de decisiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en relación a las mismas. Lo anterior, ya que el período de reserva surtirá efectos únicamente hasta en tanto el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán tome alguna decisión en relación a las propuestas planteadas en el estudio-jurídico administrativo que fue puesto a su conocimiento en la sesión del 6 de junio de 2024.

De este modo se garantiza el derecho del solicitante de conocer la información que ha sido requerida, toda vez que la misma será entregada una vez el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán tome alguna decisión relacionada con el contenido del estudio referido, y a la vez, se salvaguarda la facultad del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de tomar las decisiones relativas a su propia organización y funcionamiento de forma libre e independiente de cualquier injerencia externa.

En virtud de todo lo anterior, y al haberse justificado todos los extremos




previstos en la Ley, se **reserva** el documento requerido, de conformidad en los artículos **78** de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y **113 fracción VIII** de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, determinando su clasificación por un periodo de **seis meses**.

En razón de la clasificación declarada respecto al documento señalado con anterioridad, resulta conducente convocar al Comité de Transparencia de este Tribunal, quien con fundamento en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, así como el numeral 44, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es la autoridad encargada de confirmar, modificar, o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas, a fin que proceda a acordar lo conducente respecto de la información señalada, de conformidad al numeral 137 de la citada Ley General.

Sin más por el momento, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



M.D. CARLOS M. CETINA PATRÓN
COORDINADOR JURÍDICO



L.A. MARÍA CRISTINA SÁNCHEZ
TELLO ZAPATA
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN